

**ACUERDO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

En Madrid, a 27 de abril de 2023

VISTO el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la representación legal de la mercantil Subcontratación y Servicios de Madrid, S.L., contra los pliegos que rigen el contrato de “Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de tres salas de mamografía digital con tomosíntesis para el nuevo bloque técnico y de hospitalización del Hospital Universitario 12 de Octubre”, financiado con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, número de expediente 2022-0-131, este Tribunal ha adoptado la siguiente,

RESOLUCIÓN

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante anuncios publicados el 23 de febrero de 2023 en el Portal de la Contratación Pública, el 24 en el DOUE y el 7 de marzo en el BOCM, se convocó la licitación del contrato de referencia mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios de adjudicación.

El valor estimado de contrato asciende a 810.000 euros y su plazo de duración será de 3 meses y siempre antes de noviembre de 2023.

Segundo.- Los pliegos fueron publicados el 23 de febrero y posteriormente subsanados, mediante Resolución, de 13 de marzo de 2023, de la Dirección Gerencia del Hospital 12 de Octubre al observarse errores materiales en diversos aspectos. Dicha Resolución fue publicada el mismo día.

Los pliegos rectificadas fueron publicados en el Portal de la Contratación Pública en 17 de marzo de 2023.

Tercero.- El 11 de abril de 2023, tuvo entrada en este Tribunal el recurso especial en materia de contratación, formulado por la representación de Subcontratación y Servicios de Madrid, S.L., en el que solicita que se anule el apartado 2.2.10 del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) en concreto lo relativo a la exigencia de disponer con la “*aprobación por parte de la FDA*”, esto es, la Agencia norteamericana para la regulación de la alimentación y el medicamento. Además, solicita la suspensión el procedimiento de licitación hasta que se resuelva el recurso.

El 21 de abril el órgano de contratación remitió el expediente de contratación y el informe a que se refiere el artículo 56.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP) solicitando la desestimación del recurso.

Cuarto.- No se ha dado traslado del recurso a posibles interesados al no ser tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones que las aducidas por el recurrente, de conformidad con lo establecido en el artículo 82.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, aplicable en virtud de lo establecido en el artículo 56 de la LCSP.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- De conformidad con lo establecido en el artículo 46.1 de la LCSP y el artículo 3 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas

y Racionalización del Sector Público, corresponde a este Tribunal la competencia para resolver el presente recurso.

Segundo.- El recurso ha sido interpuesto por persona legitimada para ello, al tratarse de un potencial licitador *“cuyos derechos e intereses legítimos individuales o colectivos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados de manera directa o indirectamente por las decisiones objeto del recurso”* (artículo 48 de la LCSP). No ha presentado oferta pues alega que no dispone de la aprobación de la FDA exigida en el pliego de prescripciones técnicas.

Tercero.- A la vista de los antecedentes es preciso analizar si el recurso se interpuso dentro del plazo establecido al efecto.

Los pliegos, como se ha expuesto fueron publicados, el 23 de febrero de 2023 y posteriormente rectificados cuya publicación se realizó el 17 de marzo de 2023.

Revisada por este Tribunal el contenido de las modificaciones se comprueba que los motivos de impugnación no se refieren a ninguna de las cláusulas modificadas. Por ello, el plazo para interponer el recurso se computa a partir del 23 de febrero y el recurso interpuesto el 11 de abril de 2023 es extemporáneo, de conformidad con el artículo 50.1 de la LCS.

En el mismo sentido nuestra Resolución 172/2021, de 21 de abril, *“Conviene señalar que si bien se publicó en el perfil de contratante una corrección de errores al PCAP el 19 enero de 2021, al estar referida al Anexo 1.2 “Importe de la solvencia establecida en el apartado 5 de la cláusula 1” y no afectar al objeto de impugnación no puede conllevar efectos a la hora de considerar ampliado el plazo de interposición del presente recurso. En este sentido hemos de recordar que es doctrina asentada del Tribunal que, si los defectos alegados por la recurrente en su impugnación se refieren a aspectos no modificados por el órgano de contratación en su resolución de corrección, debe tomarse como dies a quo, o momento inicial en el cómputo del plazo de interposición del recurso especial, la fecha de la publicación inicial del anuncio de licitación en el perfil de contratante”*.

Como ha mantenido este Tribunal en reiteradas Resoluciones, el principio de seguridad jurídica justifica que no se pueda impugnar cuando ha transcurrido el plazo legal, pues en caso contrario se defraudaría la confianza legítima de los competidores convencidos de la regularidad del procedimiento de licitación. Los plazos de admisibilidad constituyen normas de orden público que tienen por objeto aplicar el principio de seguridad jurídica regulando y limitando en el tiempo la facultad de impugnar las condiciones de un procedimiento de licitación. El plazo de interposición es también consecuencia del principio de eficacia y celeridad que rigen el recurso ya que una resolución tardía produce inseguridad jurídica en los licitadores, y en el órgano de contratación, además de alargar la tramitación del procedimiento; asimismo reduce el riesgo de recursos abusivos. El recurso debe formularse dentro del plazo fijado al efecto y cualquier irregularidad del procedimiento que se alegue debe invocarse dentro del mismo, so pena de caducidad, garantizando así el principio de efectividad del recurso.

Asimismo, el artículo 55 de la LCSP dispone que cuando el órgano encargado de resolver el recurso apreciará de modo inequívoco y manifiesto, entre otros supuestos, que la interposición del recurso se ha efectuado una vez finalizado el plazo establecido para su interposición, dictará resolución acordando la inadmisión del recurso.

Igualmente, el artículo 22.1.5º del Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (RPERMC), aprobado por Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, prevé que solo procederá la admisión del recurso cuando concurra, entre otros, el requisito de que la interposición se haga dentro de los plazos previstos en el artículo 44.2 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (actual 50.1 de la LCSP), recogiendo en su artículo 23 que la apreciación del cumplimiento de los requisitos para la admisión del recurso corresponde al Tribunal.

En consecuencia, procede inadmitir el presente recurso, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 50.1.a) y b) y 55.d) de la LCSP, por haberse interpuesto el

recurso especial en materia de contratación, una vez transcurrido el plazo legalmente establecido para su presentación, resultando extemporáneo.

Inadmitido el recurso no procede pronunciarse sobre la medida cautelar solicitada.

En su virtud, previa deliberación, por unanimidad, y al amparo de lo establecido en el artículo 46.1 de la LCSP y el artículo 3.5 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid:

ACUERDA

Primero.- Inadmitir el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la mercantil Subcontratación y Servicios de Madrid, S.L., contra los pliegos que rigen el contrato de “Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de tres salas de mamografía digital con tomosíntesis para el nuevo bloque técnico y de hospitalización del Hospital Universitario 12 de Octubre”, financiado con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, número de expediente 2022-0-131, por haberse presentado una vez finalizado el plazo establecido para su interposición.

Segundo.- Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso por lo que no procede la imposición de la multa prevista en el artículo 58 de la LCSP.

Tercero.- Notificar este acuerdo a todos los interesados en este procedimiento.

Esta resolución es definitiva en la vía administrativa, será directamente ejecutiva y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, de conformidad con

lo dispuesto en los artículos 10, letra k) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, todo ello de conformidad con el artículo 59 de la LCSP.